

REPÚBLICA DE COLOMBIA
TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN



SALA LABORAL

Apelación - SENTENCIA	
DEMANDANTE	LUIS CARLOS MONCADA SÁNCHEZ
DEMANDADO	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES
RADICADO	05001-31-05-016-2018-00337-02
MAGISTRADA PONENTE	MARTHA TERESA FLÓREZ SAMUDIO
TEMA	Retroactivo e intereses moratorios, incrementos pensionales.
DECISIÓN	Modifica, adiciona, y confirma.

Medellín, veintiocho (28) de febrero de dos mil veintitrés (2023)

La Sala Tercera de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Medellín, integrada por los magistrados ORLANDO ANTONIO GALLO ISAZA, MARÍA NANCY GARCÍA GARCÍA y como ponente MARTHA TERESA FLÓREZ SAMUDIO, en acatamiento de lo previsto en el artículo 13 de la Ley 2213 de 2022 que dispuso adoptar como legislación permanente las normas contenidas en el Decreto Ley 806 de 2020, y surtido el traslado correspondiente, procede la Sala a proferir sentencia ordinaria de segunda instancia dentro del presente proceso, promovido por el señor **LUIS CARLOS MONCADA SÁNCHEZ** contra la **ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES – COLPENSIONES**.

Después de deliberar sobre el asunto, de lo que se dejó constancia en el **ACTA No 009**, se procedió a decidirlo en los siguientes términos:

I. – ASUNTO

Es materia de la Litis, resolver los recursos de apelación formulados por los apoderados judiciales de ambas partes, así como el grado jurisdiccional de

consulta a favor de COLPENSIONES, contra la sentencia que profirió el Juzgado Dieciséis Laboral del Circuito de Medellín - Antioquia, en la audiencia pública celebrada el día 22 de julio de 2020, dentro del proceso referenciado.

II. – HECHOS DE LA DEMANDA

Como fundamento de las pretensiones incoadas con la demanda, se expuso, en síntesis, que el señor LUIS CARLOS MONCADA SÁNCHEZ nació el 1 de abril de 1945, por lo que cumplió la edad pensional de 60 años el mismo mes y día del año 2005, fecha para la cual contaba con 564,3 semanas de cotización al sistema general de pensiones, siendo beneficiario del régimen de transición pensional previsto en el art. 36 de la Ley 100 de 1993, circunstancia que le permitía causar una pensión de vejez bajo los requisitos del acuerdo 049 de 1990.

También relata el escrito introductorio que el actor, valiéndose de una acción de tutela, logró que un antiguo empleador “MINERA EL ROBLE”, efectuase el pago a COLPENSIONES de un cálculo actuarial de \$62.116.704 por la omisión de afiliación en el periodo comprendido entre el 17 de septiembre de 1987 y el 31 de julio de 1994, valores cancelados en el año 2013, y sumado a ello, el actor tiene una demanda contra la misma empresa solicitando la declaratoria de un contrato realidad por la contratación realizada con anterioridad al año 1987, acción judicial que está siendo tramitada ante el Juzgado 15 Laboral del Circuito de Medellín.

Que el actor elevó solicitud pensional a COLPENSIONES el día 8 de septiembre de 2014, y la entidad mediante resolución N° GNR-433686 del 20 de diciembre de 2014, accedió a la prestación económica deprecada, a partir del 1° de enero de 2015, en cuantía mensual de \$730.712, sin reconocerse allí suma alguna por concepto de retroactivo pensional, desconociendo con ello que la pensión debía empezarse a pagar desde el cumplimiento del requisito de edad y semanas cotizadas.

Ante el no reconocimiento del retroactivo pensional y los intereses moratorios, el actor elevó reclamación en tal sentido el día 14 de septiembre de 2017, pero la entidad dio respuesta negativa a través de la resolución N° SUB-

202679 del 22 de diciembre de 2017, argumentando que no se había acreditado el retiro del sistema general de pensiones, contrariando con el ello el inciso 2° del art. 17 de la Ley 797 de 2003.

Finalmente aduce el escrito introductorio que el actor tiene un vínculo matrimonial vigente con la señora SOLEDAD MUÑOZ VÉLEZ, con quien convive bajo el mismo techo desde hace más de 8 años, y quien depende económicamente de él como pensionado, pues su cónyuge es una persona que no trabaja, y tampoco percibe pensión u otros ingresos que le permitan su auto sostenimiento, y fue por ello que solicito el incremento pensional por cónyuge a cargo ante COLPENSIONES el día 23 de marzo de 2018.

III. – PRETENSIONES

La acción judicial está dirigida a que SE DECLARE que al señor LUIS CARLOS MONCADA SÁNCHEZ le asiste derecho al disfrute de su pensión de veje desde el 1 de abril de 2005 en que cumplió los requisitos de edad y semanas cotizadas, así como al incremento pensional por personas a cargo, en consecuencia, SE CONDENE a la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES, al pago de las mesadas causadas entre el 1° de abril de 2005 y hasta el 31 de diciembre de 2014, junto con los intereses moratorios del art. 141 de la ley 100 de 1993, los incrementos pensionales por cónyuge a cargo, la indexación de las condenas, lo que ultra y extra patita resulte acreditado en el plenario, y las costas del proceso.

IV. – RESPUESTA A LA DEMANDA

COLPENSIONES, a través de su apoderada judicial dio respuesta oportuna a la demanda según consta en el archivo PDF 013 del expediente digital, manifestando frente a los supuestos fácticos narrados por la activa, que son ciertos aquellos que aluden a la fecha de nacimiento del demandante, y el reconocimiento a su favor de una pensión de vejez como beneficiario del régimen de transición pensional del art. 36 de la Ley 100 de 1993, en consonancia con el acuerdo 049 de 1990, también se acepta la existencia y contenido de los actos administrativos expedidos por COLPENSIONES para

resolver las solicitudes presentadas por el demandante, sin que le consten los restantes supuestos fácticos, los cuales deberán ser objeto de debate probatorio en la litis; se opuso a la prosperidad de todas y cada una de las pretensiones formuladas, proponiendo en su defensa las excepciones de mérito que denominó: *“INEXISTENCIA DE LA OBLIGACIÓN DE RECONOCER Y PAGAR RETROACTIVO PENSIONAL; INEXISTENCIA DE LA OBLIGACIÓN DE PAGAR INTERESES MORATORIOS; INEXISTENCIA DE LA OBLIGACIÓN DE RECONOCER Y PAGAR INCREMENTOS PENSIONALES DEL 14%; IMPOSIBILIDAD DE CONDENA EN COSTAS; y BUENA FE DE COLPENSIONES”*.

V. - DECISIÓN DE PRIMERA INSTANCIA

En el fallo objeto de apelación, la juez *A Quo* en audiencia pública de juzgamiento, celebrada el 22 de julio de 2020, CONDENÓ a COLPENSIONES a reconocer y pagar al señor LUIS CARLOS MONCADA SÁNCHEZ la suma de \$3.336.582 a título de retroactivo pensional por las mesadas causadas entre el 9 de septiembre y el 31 de diciembre de 2014.

Sobre la anterior condena, ordenó el pago de los intereses moratorios del art. 141 de la Ley 100 de 1993, los cuales deberán ser liquidados desde el mes de febrero de 2014 y hasta el momento en que se efectuó el pago total de la obligación, no obstante, el *A Quo* efectuó una liquidación provisional de intereses moratorios hasta el mes de junio de 2020 en la suma de \$4.757.782.

Finalmente absolvió a COLPENSIONES de las demás pretensiones y cargos formulados en su contra, pero le impuso la condena en costas procesales en la primera instancia, fijándole como agencias en derecho la suma de \$500.000.

Como fundamento de su decisión, estimó la juez de primer grado que de conformidad con los arts. 13 y 35 del acuerdo 049 de 1990 que regulan lo relativo a la causación y disfrute de la pensión de vejez, al demandante solo le asiste derecho a disfrutar de su pensión desde el 9 de septiembre de 2014, pues aunque sea cierto que arribo a la edad pensional en el año 2005, la

solicitud de reconocimiento pensional apenas se presentó el 8 de septiembre de 2014, y la última cotización al sistema general de pensiones data del mes anterior agosto de 2014, y por ello así el demandante no haya reportado el retiro formal, el retiro tácito se entiende configurado a partir de la solicitud pensional, donde se exteriorizó la intención del afiliado de acceder al derecho pensional.

En relación a los intereses moratorios, coligió el fallador de instancia, que los mismos se entienden configurados a partir del 8 de enero de 2015, cuando venció el término de 4 meses al que alude el art. 9° de la Ley 797 de 2003, fecha para la cual ya debía haberse pagado el retroactivo pensional adeudado.

Frente a la pretensión de incrementos pensiones a los que alude el art. 21 del acuerdo 049 de 1990, concluyó el juez de primer grado que la misma no resultaba procedente, por cuanto la jurisprudencia de la Corte Constitucional en la sentencia SU-140 de 2019, concluyó que tales incrementos ya no estaban vigentes, lo anterior aunado a que al interior del proceso no comparecieron los testigos con los cuales se pretendía acreditar la dependencia económica de la cónyuge respecto al pensionado.

VI. – RECURSO DE APELACIÓN EN CONTRA DE LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA.

Parte demandante: su apoderada judicial dice no estar de acuerdo con lo resuelto frente a la concesión del retroactivo pensional, pues insiste en que el disfrute pensional debió ser concomitante con la causación pensional, es decir, desde el momento en que el actor arribó a la edad pensional de 60 años (hombres) y 500 semanas de cotización en los 20 años anteriores al cumplimiento de la edad pensional, conforme lo reglado en el art. 12 del acuerdo 049 de 1990, que le resulta aplicable al demandante por ser beneficiario del régimen de transición pensional al que alude el art. 36 de la Ley 100 de 1993, y que en el presente asunto el pago de un cálculo actuarial a favor del demandante el 30 de septiembre de 2013, no podía ser el argumento para negarle el derecho al disfrute pensional desde que cumplió los requisitos de edad y semanas, pues la omisión del empleador no le es imputable al

demandante, pide la aplicación de la sentencia de tutela STL1776-2022 M.P. LUIS BENEDICTO HERRERA RUIZ. Motivos por los cuales solicita se condene al pago del retroactivo pensional desde el 1° de abril de 2005, incluida la mesadas adicionales y hasta el 8 de septiembre, y los intereses moratorios del art. 141 de la Ley 100 de 1993.

COLPENSIONES: la apoderada judicial de la entidad accionada expone en su alzada que, en el presente asunto, debe tenerse presente que el último ciclo de cotización del demandante corresponde al mes de agosto de 2014, y la solicitud pensional fue presentada el 8 de septiembre del mismo año, lo que permite inferir que la entidad accionada tenía hasta el 8 de enero de 2015 para resolver la solicitud pensional en acatamiento al plazo de 4 meses previsto en el art. 9° de la Ley 797 de 2003, y como así ocurrió, no hay lugar a los intereses moratorios deprecados, y que fueron ordenados por el a quo desde el mes de febrero de 2014, fecha en que ni siquiera se había presentado la reclamación pensional, motivos por los cuales solicita la revocatoria de la providencia recurrida en este sentido.

Alegatos de conclusión.

Encontrándose dentro de la oportunidad procesal correspondiente, la apoderada judicial de COLPENSIONES presentó sus alegatos de conclusión ante esta instancia, insistiendo en la improcedencia de la condena a los intereses moratorios del art. 141 de la Ley 100 de 1993, argumentando al respecto, que los citados intereses se causan a partir del cuarto mes después de efectuada la reclamación ante la entidad, y la imposición de los mismos, debe hacerse desde el momento en el que venció el plazo legal para que se otorgara el derecho pensional, es decir, su aplicación se da únicamente si hubo un retardo injustificado en el pago de las mesadas pensionales, situación fáctica en la que no se encontraba el demandante, pues Colpensiones tenía hasta el 8 de enero de 2015, para darle respuesta al solicitante sobre su pensión.

Señaló igualmente que en el *sub lite* no es aplicable la teoría de la desafiliación tácita al sistema, pues hay que recordar que muchos de los afiliados, aún cumplida la edad para pensionarse, continúan haciendo

cotizaciones al sistema para mejorar la tasa de reemplazo aplicable, lo que deriva en una mesada pensional más alta, situación que desconoció el juez de instancia, aplicando los referidos intereses desde el mes de febrero del año 2014.

Teniendo en cuenta la anterior crónica procesal, pasa la Sala a resolver previas las siguientes,

VII. – CONSIDERACIONES DEL TRIBUNAL

Los presupuestos procesales, requisitos indispensables para regular la formación y desarrollo de la relación jurídica, como son demanda en forma, Juez competente, capacidad para ser parte y comparecer al proceso se encuentran cumplidos a cabalidad en el caso objeto de estudio, lo cual da mérito para que la decisión que se deba tomar en esta oportunidad sea de fondo.

Naturaleza jurídica de la pretensión. -Retroactivo pensional e intereses moratorios, desafiliación tacita al sistema general de pensiones.

Teniendo en cuenta el recurso de apelación impetrado, el cual delimita la competencia de la Sala en la segunda instancia, la controversia jurídica que debe resolver la Sala, consiste en determinar, a partir de qué momento debe comenzar el disfrute pensional en favor del señor LUIS CARLOS MONCADA SÁNCHEZ, a cuánto asciende el retroactivo adeudado, y si este puede ser objeto de los intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993.

Disfrute y retroactivo pensional.

Pues bien, conforme a lo dispuesto en los arts. 13 y 35 del Acuerdo ISS 049 de 1990, que regulan los fenómenos de la causación como al disfrute de la pensión de vejez, y que resultan aplicables en el actual sistema general de pensiones, en virtud del art. 31 de la ley 100 de 1993, todo afiliado luego del

cumplimiento de los requisitos legales de edad y semanas cotizadas o tiempo de servicios, debe desafiliarse, para iniciar con el goce de la pensión de vejez, veamos:

“ARTÍCULO 13. CAUSACION Y DISFRUTE DE LA PENSION POR VEJEZ. *La pensión de vejez se reconocerá a solicitud de parte interesada reunidos los requisitos mínimos establecidos en el artículo anterior, pero será necesaria su desafiliación al régimen para que se pueda entrar a disfrutar de la misma. Para su liquidación se tendrá en cuenta hasta la última semana efectivamente cotizada por este riesgo.”*

“ARTÍCULO 35. FORMA DE PAGO DE LAS PENSIONES POR INVALIDEZ Y VEJEZ. *Las pensiones del Seguro Social se pagarán por mensualidades vencidas, previo el retiro del asegurado del servicio o del régimen, según el caso, para que pueda entrar a disfrutar de la pensión. El Instituto podrá exigir cuando lo estime conveniente, la comprobación de la supervivencia del pensionado, como condición para el pago de la pensión, cuando tal pago se efectúe por interpuesta persona.”*

La interpretación textual de las citadas normas permite colegir que la percepción de la pensión está supeditada a la desvinculación del régimen, y de ello ha dado cuenta la basta jurisprudencia de la Sala de Casación Laboral de la H. Corte Suprema de Justicia, que indica que la regla general sigue siendo la desvinculación del sistema como requisito necesario para el inicio de la percepción de la pensión. Sin embargo, el mismo órgano de cierre ha evidenciado situaciones particulares, en las cuales la interpretación textual conduce a soluciones insatisfactorias en términos valorativos, lo que la ha llevado a la utilización de otras alternativas hermenéuticas para dar solución a esos casos que, por sus particularidades requieren una solución diferente.

Así, por ejemplo, tratándose de eventos en los cuales la conducta del afiliado denota su intención de cesar definitivamente las cotizaciones al sistema, la alta Corporación ha considerado que la prestación debe ser pagada, aun cuando no se evidencia la desafiliación formal del sistema, tesis que ha sido expuesta, entre otras, en las sentencias SL5603-2016; SL9036-2017; SL15559-2017; SL11005-2017; SL11895-2017; también frente a la figura de la “aceptación tácita de la afiliación”, consistente en que, cuando hay silencio de la administradora de pensiones con relación a las posibles deficiencias de la afiliación o vinculación y, al tiempo, esta recibe el pago de aportes por un

período significativo, se da una manifestación implícita de voluntad del afiliado, que lleva a que no pueda perderse el derecho a la pensión, a pesar de la falta de diligenciamiento del formulario (SL 40531, 19 jul. 2011; SL14263-2015).

En estas hipótesis se le ha dado un lugar preeminente a la realización de cotizaciones (afiliación tácita) o al cese de ellas (desafiliación tácita) como un claro reflejo de la intención del trabajador, más allá de la existencia del acto formal del diligenciamiento y entrega del formulario de vinculación o reporte de retiro, y por ello la intención del afiliado de no seguir vinculado al sistema se puede deducir de varias circunstancias y no necesariamente de la acreditación formal del retiro del sistema.

CASO CONCRETO

En el caso bajo análisis se observa que en la resolución que se reconoció la pensión de vejez al demandante con régimen de transición – Acuerdo 049 de 1990 (GNR-433686 del 20 de diciembre de 2014) y en la que se negó el retroactivo pensional deprecado (GNR-202679 del 22 de septiembre de 2017) se indicó que la misma se reconocía a partir del ingreso a nómina de pensionados por no haberse acreditado la novedad formal de retiro “R” al sistema general de pensiones (fls. 59 al 75 del archivo PDF 005).

Pues bien, la prueba arrimada al expediente (registro civil de nacimiento – fls. 1 del archivo PDF 005) da cuenta de que el demandante cumplió la edad mínima para pensionarse con régimen de transición – Acuerdo 049 de 1990 -, el día 1° de abril de 2005, fecha para la cual ya contaba con más de 500 semanas laboradas en los 20 años anteriores al cumplimiento de la edad pensional, densidad que sin lugar a dudas le permitía causar una pensión de vejez, por régimen de transición en consonancia con el art. 12 del acuerdo 049 de 1990, según lo acepta la misma entidad en la resolución GNR-433686 del 20 de diciembre de 2014, donde se reconoce la existencia de 1.356 semanas de cotización entre el 17 de septiembre de 1987 y el 31 de agosto de 2014, todas ellas en calidad de trabajador “dependiente”

ENTIDAD LABORO	DESDE	HASTA	NOVEDAD	DIAS
1 MINERA EL ROBLE S.A.	19870917	19940731	TIEMPO SERVICIO	2510
EL ROBLE EXPLORACION EXPLOT	19940801	19941231	TIEMPO SERVICIO	153
EREESA	19950201	19980414	TIEMPO SERVICIO	1154
MINERA EL ROBLE S.A.	19980801	19990828	TIEMPO SERVICIO	388
MINERA EL ROBLE S.A.	19991001	20000227	TIEMPO SERVICIO	147
MINERA EL ROBLE S.A.	20000301	20001129	TIEMPO SERVICIO	269
MINERA EL ROBLE S.A.	20001201	20010112	TIEMPO SERVICIO	42
MINERA EL ROBLE S.A.	20010201	20020113	TIEMPO SERVICIO	343
MINERA EL ROBLE S.A.	20020201	20060405	TIEMPO SERVICIO	1505
MINERA EL ROBLE S.A.	20060501	20130325	TIEMPO SERVICIO	2485
MINERA EL ROBLE S.A.	20130401	20130425	TIEMPO SERVICIO	25
MINERA EL ROBLE S.A.	20130501	20140529	TIEMPO SERVICIO	389
MINERA EL ROBLE S.A.	20140601	20140628	TIEMPO SERVICIO	28
MINERA EL ROBLE S.A.	20140701	20140728	TIEMPO SERVICIO	28
MINERA EL ROBLE S.A.	20140801	20140831	TIEMPO SERVICIO	30

Que conforme lo anterior, el interesado acredita un total de 9,496 días laborados, correspondientes a 1,356 semanas.

Sin embargo, la parte demandante aduce que no pudo solicitar la pensión de vejez en el año 2005 cuando arribó a la edad pensional, pues su empleador había omitido el pago de aportes pensionales entre el 17 de septiembre de 1987 y el 31 de julio de 1994, periodos que apenas se cancelaron bajo la figura de un cálculo actuarial en el mes de septiembre de 2013 (fls. 24 y 25 del archivo PDF 005).

Trabajador:	MONCADA SANCHEZ LUIS CARLOS	C.C.:4,828,633
Fecha Nacimiento:	01/04/1945	Sexo:Masculino
Fecha de Corte:	31/07/1994	Fecha Salario Base:31/07/1994
Salario Base:	\$127,000	
Ciclos Validados		
Fecha Validar Desde:	Fecha Validar Hasta:	Años a Validar
17/09/1987	31/07/1994	6.8720

Y que esta omisión del empleador le dificultó acceder a la pensión de vejez desde el cumplimiento de la edad pensional (60 años – hombres – con régimen de transición).

Sin embargo, esta Sala no comparte el entendimiento que realiza la parte demandante, pues, si bien es cierto el demandante causó su pensión de vejez con régimen de transición desde el 1° de abril de 2005, tal circunstancia no significaba necesariamente que el disfrute pensional iniciará ese mismo día; por el contrario, se requería demostrar una desafiliación al sistema general de

pensiones, ya fuese de manera formal, o tácitamente, es decir, exteriorizándole a la administradora pública de pensiones la intención de consolidar el status pensional, ya sea radicando una solicitud pensional en ese mismo año 2005, o iniciando una acción judicial tendiente para lograr el pago de la pensión de vejez con la inclusión de los aportes en mora por parte del empleador “MINERA EL ROBLE S.A.”

Para la Sala la intención inequívoca de desafiliación no se encuentra del todo clara en el sub lite para acceder al retroactivo pensional que reclama el actor, pues si bien este logró a través de una acción de tutela que su empleador efectuase el pago de un cálculo actuarial en el mes de septiembre de 2013, tampoco solicitó pensión de vejez en ese mismo año, por el contrario, siguió cotizando casi un (1) más hasta el 31 de agosto de 2014, en calidad de trabajador “DEPENDIENTE” al servicio del mismo empleador “MINERA EL ROBLE S.A.”, además según lo dispuesto en el art. 17 de la ley 100 de 1993, *“...la obligación de cotizar cesa al momento en que el afiliado reúna los requisitos para acceder a la pensión mínima de vejez, o cuando el afiliado se pensione por invalidez o anticipadamente...”*, y seguidamente dispone la citada *“...sin perjuicio de los aportes voluntarios que decida continuar efectuando el afiliado o el empleador en los dos regímenes...”*

Así las cosas, solo es factible colegir que la desafiliación tacita al sistema general de pensiones solo operó con la solicitud pensional realizada el día 8 de septiembre de 2014, y por ello el disfrute debía otorgarse a partir del 1° de septiembre de 2014, día siguiente a la última cotización, y no a partir del día siguiente a la solicitud pensional como equivocadamente lo asumió el juez de primer grado, motivos por los cuales se modificara lo resuelto en este sentido.

Y por ello procedió la Sala recalcular el valor de la condena por concepto de retroactivo pensional liquidado por la A Quo, encontrando que entre el 1° de septiembre de 2014 y el 31 de diciembre de 2014 (4 mesadas ordinarias y 1 adicional \$704.912) se adeuda la suma de TRES MILLONES QUINIENTOS VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS M/L (\$3.524.560), suma sobre la cual se autorizará a COLPENSIONES a efectuar la deducción del aporte obligatorio al subsistema de salud, al ser esta una obligación legal que le

asiste a todo pensionado, conforme lo establecido en el art. 143 de la Ley 100 de 1993.

De otro lado, y frente al fenómeno prescriptivo, también debe colegirse que este no alcanzó a surtir efectos sobre las mesadas que componen el retroactivo pensional de conformidad con los arts. 488 del CST y 151 del CPTSS teniendo en cuenta que la resolución que le negó el retroactivo pensional al actor (SUB-202679 del 22 de septiembre de 2017) le fue notificada el día 10 de octubre de 2017, y la demanda ordinaria laboral que hoy nos ocupa data del 25 de Mayo de 2018 (fls.9 archivo PDF 004), es decir, no alcanzó a transcurrir el término prescriptivo de 3 años al que aluden las citadas normativas.

Intereses Moratorios.

La Sala también revisará la condena por este concepto, intereses que como bien se sabe se encuentran regulados en el art 141 de la Ley 100/93, disposición que establece que, en caso de retardo en el pago de las mesadas pensionales, la entidad debe reconocer y pagar al pensionado la obligación a su cargo y sobre ella la tasa máxima de interés moratorio vigente al momento en que se efectúe el pago.

Por su parte, el artículo 9° de la Ley 797 de 2003, les concede a las Administradoras y Fondos de Pensiones, en el caso de solicitudes de pensión de vejez un plazo de cuatro (4) meses contados a partir de la presentación de la solicitud para resolver y pagar estas pensiones, lo que significa que los intereses se causan a partir del primer día del quinto mes siguiente a la solicitud pensional, eso sí siempre y cuando a la fecha de la solicitud el peticionario haya cumplido con todos los requisitos para su reconocimiento, que según la norma se circunscriben a la tendiente a la acreditación del derecho.

Estima la Sala que en el presente asunto COLPENSIONES incurrió en mora en el pago de las mesadas pensionales comprendidas entre el 1° de septiembre de 2014 y el 31 de diciembre de 2014, pues para la fecha en que el actor elevó la solicitud pensional ya se encontraban satisfechos los requisitos

de edad y semanas cotizadas, y también se había cesado cotizaciones desde el 31 de agosto de 2014, es decir, se encontraba configurada la desafiliación tacita al sistema general de pensiones, por lo que no le era dable a la entidad accionada ordenar el disfrute pensional a partir del ingreso a nómina de pensionados como equívocamente se dispuso en la resolución N° GNR-433686 de 20 de diciembre de 2014.

No obstante, estos intereses moratorios se causaron a partir del 9 de enero de 2015, es decir, al primer día del quinto mes de efectuada la solicitud pensional (8 de septiembre de 2014) y no a partir del mes de febrero de 2014 como se consignó en el NUMERAL SEGUNDO de la parte resolutive de la sentencia de primera instancia, motivos por los cuales se modificará la providencia recurrida en este sentido, revocándose la liquidación provisional allí establecida, pues si bien es cierto, en nuestro ordenamiento procesal están prohibidas las condenas en abstracto, los intereses moratorios no pueden liquidarse provisionalmente pues se desconoce la fecha de pago, y es este extremo final el que va a determinar la tasa de intereses moratorio aplicable.

Finalmente, respecto al reparo que realiza la apoderada judicial del demandante quien manifestó durante el recurso de alzada que al actor no le está pagado en la actualidad las mesadas adicionales, la Sala no hará ningún pronunciamiento pues este punto no está contenido en el acápite de las pretensiones, tampoco se fijó el litigio en este sentido, y mucho menos se agotó una reclamación administrativa frente a COLPESIONES, constituyéndose así esta solicitud en una afrenta al debido proceso de la entidad accionada, que no será avalado por la Sala.

Teniendo en cuenta la naturaleza de la decisión proferida y la prosperidad parcial del recurso de apelación formulado por la apoderada judicial de COLPENSIONES en relación al extremo inicial de los intereses moratorios del art. 141 de la Ley 100 de 1993, no habrá lugar a las costas procesales de segunda instancia.

VIII. – DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la **SALA TERCERA DE DECISION LABORAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE MEDELLÍN**, administrando justicia en nombre de la república y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

PRIMERO: MODIFICAR la sentencia objeto de apelación y consulta de fecha y procedencia conocida, en cuanto al valor del retroactivo pensional adeudado al señor LUIS CARLOS MONCADA SÁNCHEZ, el cual quedará en la suma de TRES MILLONES QUINIENTOS VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS M/L (\$3.524.560), que comprende las mesadas causadas entre el 1° de septiembre de 2014 y el 31 de diciembre de 2014, incluida la mesada adicional de diciembre de 2014, también se autorizará a la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES – COLPENSIONES, a descontar de esta condena el porcentaje destinado al subsistema de salud, en los términos del art. 143 de la Ley 100 de 1993, según lo expuesto en precedencia.

SEGUNDO: MODIFICAR el extremo inicial para liquidar los intereses moratorios del art. 141 de la Ley 100 de 1993 a favor del señor LUIS CARLOS MONCADA SÁNCHEZ y a cargo de la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES – COLPENSIONES, DECLARANDO que dicha condena debe liquidarse a partir del 9 de enero de 2015 y hasta la fecha en que se efectuó el pago, a la tasa máxima de interés moratorio vigente, REVOCÁNDOSE la liquidación provisional contenida en el NUMERAL SEGUNDO de la parte resolutive de la sentencia objeto de apelación y consulta de fecha y procedencia conocida según lo expuesto en precedencia.

TERCERO: CONFIRMAR en todo lo demás la sentencia objeto de apelación y consulta de origen y fecha conocidos, de conformidad a lo expuesto.

CUARTO: Sin COSTAS en esta instancia.

QUINTO: SE ORDENA la notificación por **EDICTO** de esta providencia, que se fijará por secretaría por el término de un día, en acatamiento a lo dispuesto por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia en auto AL2550-2021.

Los magistrados



MARTHA TERESA FLÓREZ SAMUDIO



ORLANDO ANTONIO GALLO ISAZA



MARÍA NANCY GARCÍA GARCÍA